



ESPAÑA PARTIDA EN DOS

BREVE HISTORIA
DE LA GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA

JULIÁN
CASANOVA

CRÍTICA

Julián Casanova

ESPAÑA PARTIDA EN DOS

*Breve historia de la
Guerra Civil española*

CRÍTICA
BARCELONA

Primera edición: febrero de 2013
Primera edición en rústica: abril de 2014

España partida en dos
Julián Casanova

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal)

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Título original: *A Short History of the Spanish Civil War*

© del diseño de la portada, Jaime Fernández, 2013
© de la imagen de la portada, P. Rotger/ Iberfoto/ The Image Works/ Jaime Fernández

Composición: gama, sl

© 2013, Julián Casanova
Published by arrangement with I.B. Tauris & Co Ltd, London. The original English edition of this book is entitled 'A Short History of the Spanish Civil War' and published by I.B. Tauris & Co Ltd.

© Editorial Planeta S. A., 2014
Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)
Crítica es un sello editorial de Editorial Planeta, S. A.

editorial@ed-critica.es
www.ed-critica.es
www.espacioculturalyacademico.com

ISBN: 978-84-9892-695-8
Depósito legal: B. 4964 - 2014
2014. Impreso y encuadernado en España por Book Print

1

España partida en dos

EL GOLPE MILITAR NO pudo lograr de entrada la conquista del poder. La confianza en un rápido triunfo de la rebelión se desvaneció cuando los militares sublevados fueron derrotados en la mayoría de las grandes ciudades. Menos de una semana fue necesaria para aclarar el panorama. La sublevación, al ocasionar una división profunda en el Ejército y en las fuerzas de seguridad, debilitó al Estado republicano y abrió un escenario de lucha armada, de rebelión militar y de revolución popular allí donde los militares no pudieron conseguir sus objetivos. España quedó partida en dos. Y así siguió durante una guerra de mil días.

GOLPE DE ESTADO

El general Emilio Mola fue el principal protagonista de la preparación de la rebelión. Su plan preveía que los jefes militares que en las diferentes zonas de España se sumaran a la sublevación declarasen el estado de guerra para poner en manos militares la autoridad civil y controlar o liquidar de esa forma a sus posibles adversarios. El general Mola había sido el último Director General de Seguridad de la Monarquía de Alfonso XIII. Expulsado del Ejército por la República, fue amnistiado en 1934 y el Gobierno de centro derecha, en el que Gil Robles era ministro de la Guerra, lo envió a Marruecos en 1935 a ocupar la jefatura

del ejército de Marruecos. El Gobierno de Manuel Azaña, salido de las elecciones de febrero de 1936, lo trasladó unas semanas después a Pamplona, alejándole del vital ejército de África, y desde esa pequeña ciudad del norte, con el seudónimo de «El Director», dictó los informes y las instrucciones reservadas para los que iban a ser jefes de la rebelión.

Al conocerse la noticia del inicio de la sublevación militar en Marruecos, el jefe de Gobierno, Santiago Casares Quiroga,¹ temeroso de la revolución y del desorden popular que podía estallar, ordenó a los gobernadores civiles que no repartiesen armas entre las organizaciones obreras. Y además quitó importancia a lo que estaba sucediendo. El Gobierno suspendió por decreto a los militares rebeldes, disolvió a las unidades sublevadas y licenció a sus soldados. Como señala Gabriel Cardona, «fue un error inútil, porque los rebeldes hicieron caso omiso de los decretos y no dejaron marchar a ninguno de sus hombres. En cambio, las tropas de muchas fuerzas dudosas o gubernamentales abandonaron las filas cuando más falta hacía».²

Casares Quiroga, incapaz de hacer frente a los acontecimientos, dimitió el 18 de julio por la noche. En la mañana siguiente aceptó la difícil tarea de formar gobierno José Giral, otro amigo y hombre de confianza de Manuel Azaña. En el Gobierno sólo había republicanos de izquierda, prácticamente los mismos que estaban ya con Casares Quiroga, y entraron dos militares: el general Sebastián Pozas en Gobernación y el general Luis Castelló en Guerra. Giral dio el paso decisivo de autorizar el reparto de armas entre los militantes obreros y republicanos más comprometidos, que salieron a las calles a combatir a los sublevados, allí donde la fidelidad de algunos mandos militares y de las fuerzas de orden, o la indecisión de otros, lo permitió. Eso pasó en Madrid, Barcelona, Valencia o San Sebastián.

En Madrid, el general Joaquín Fanjul, a quien el Gobierno había dejado sin mando por su probado antirrepublicanismo, se sublevó, aunque no era él la persona designada en los planes de Mola, y se hizo fuerte en el cuartel de La Montaña con más de dos mil militares y quinientos civiles falangistas a los que había

armado. Horas después, grupos de obreros armados y militares fieles a la República asaltaron el cuartel y mataron allí mismo, cuando ya se habían rendido, a más de un centenar de militares sublevados y falangistas. Fanjul sobrevivió unos días, antes de ser juzgado y fusilado.

Tampoco la sublevación triunfó en Barcelona, la segunda ciudad de España, el bastión de los anarquistas, que se convirtió muy pronto en el símbolo de la resistencia popular y de la revolución. Barcelona tenía una guarnición muy nutrida y dividida entre militares que apoyaban a la República y otros que estaban involucrados en la conspiración. El general encargado a última hora de dirigir allí la rebelión, Manuel Goded, comandante general de Baleares, llegó tarde, cuando ya otro general, Álvaro Fernández Burriel, se había sublevado sin planes muy precisos.

Poco pudo hacer Goded, porque un sector de la Guardia Civil, las fuerzas de orden público de la Generalitat, del gobierno autónomo de Cataluña, y los grupos anarquistas más radicales, que se habían apoderado de cientos de fusiles, controlaban ya la situación. Cuando el 20 de julio se entregaron los últimos militares alzados en Barcelona y el general Manuel Goded, sitiado en el antiguo palacio de Capitanía General, anunciaba por radio su derrota y rendición, los enfrentamientos en la capital catalana habían dejado 450 muertos. Y ni la guerra ni la revolución habían comenzado aún.

La sublevación fracasó en las dos mayores ciudades de España, pero tuvo éxito en otras ciudades muy importantes estratégicamente, desde donde se podía controlar vastas extensiones de territorio. Sevilla, la ciudad más importante de Andalucía, cayó muy pronto en poder del general Gonzalo Queipo de Llano, que había pasado en poco tiempo de ser uno de los militares de confianza de la República a su acérrimo enemigo. Y otro general supuestamente republicano, y afiliado a la masonería, Miguel Cabanellas, hizo que la sublevación triunfara en Zaragoza, la capital de Aragón, que tenía también un potente y numeroso movimiento anarcosindicalista. Que la sublevación triunfara en Zaragoza era muy importante para controlar la amplia zona de

la ribera del Ebro, marchar sobre Madrid y detener a los grupos armados que pudieran llegar desde Barcelona.

Es fundamental subrayar, para comprender por qué se inició una guerra civil, que no fue el Ejército «en bloque» el que se sublevó contra la República y tampoco fue una «rebelión de generales», como divulgó posteriormente la propaganda. De los dieciocho generales que controlaban las unidades de intervención más importantes, sólo se sublevaron cuatro: Cabanellas, Queipo de Llano, Goded y Franco. Además, los militares sublevados no permitieron ninguna indecisión o resistencia de sus propios compañeros y quienes lo intentaron lo pagaron, empezando por varios jefes y oficiales pasados por las armas sin dilación ni juicio en el Marruecos español. Eso le pasó en Melilla al general Manuel Romerales, detenido a punta de pistola en su propio despacho por algunos de sus subordinados. Miguel Campins, gobernador militar de Granada, se opuso a la sublevación, lo detuvieron varios oficiales y, conducido a Sevilla, fue fusilado el 16 de agosto acusado de «rebelión». La misma suerte corrió el general Miguel Núñez de Prado, director general de Aeronáutica, que viajó a Zaragoza para convencer a Cabanellas de que no se sublevara.

La parte más activa de la sublevación la llevó el cuerpo de oficiales. Los sublevados contaron inicialmente con unos 120.000 hombres armados, de los 254.000 que había en ese momento en la Península, en las Islas y en África, incluyendo las fuerzas de orden público. Pero, sobre todo, dispusieron desde el principio del ejército de África, de la casi totalidad de unos 1.600 jefes y oficiales y de los 40.000 hombres bajo su mando. Su tropa más afamada y mejor adiestrada era el llamado Tercio de Extranjeros, la Legión, fundada por José Millán Astray y Francisco Franco en 1920 y compuesta de prófugos, delincuentes, marginados y fugitivos, a quienes se les formaba en el culto a la virilidad y a la violencia. Al lado de la Legión estaban además las Fuerzas Regulares Indígenas, formadas por mercenarios marroquíes y algunos españoles.

Para los jefes militares sublevados, existía una larga lista de agravios causados por la República que había que vengar. Algu-

nos de ellos se habían visto afectados por la revisión de los ascensos concedidos por méritos de guerra por la dictadura de Primo de Rivera y anulados por el Gobierno de Manuel Azaña por un decreto de enero de 1933. Era el caso de los generales Aranda, Orgaz o Varela, que iban a tener un papel relevante en el ejército de Franco, aunque otros militares como Asensio Torrado, Romerales o Hidalgo de Cisneros estaban en la misma situación y fueron leales al Gobierno republicano.

La revisión de los ascensos, la Ley de Reforma Militar de Azaña y las destituciones de algunos de los jefes más comprometidos con la dictadura de Primo de Rivera estimularon la hostilidad de muchos militares contra la República. Los motivos por los que decían sublevarse, en julio de 1936, si hacemos caso a los bandos en los que proclamaban el estado de guerra, eran la «ausencia total de Poder Público» y la necesidad de mantener el orden y la unidad de la Patria. Pero aunque no constaban de forma explícita, ocupaban también un lugar destacado los agravios acumulados frente a los políticos a los que despreciaban y odiaban como lacayos del izquierdismo y del bolchevismo.

Al general Sanjurjo le habían nombrado sus compañeros golpistas jefe de la sublevación, pero murió el 20 de julio al intentar despegar con la avioneta que tenía que trasladarle a España desde su exilio en Portugal. Lo fue a recoger, enviado por el general Mola, el aviador falangista Juan Antonio Ansaldo. El avión, un frágil Puss Moth de dos plazas, se estrelló nada más despegar y se incendió cerca del aeródromo de Cascais. Ansaldo salió ileso del accidente.

Ese accidente mortal de Sanjurjo obligó a los sublevados a reorganizar sus planes. Cuatro días después, a propuesta de Mola, crearon en Burgos la Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Cabanellas. Fue el primer órgano de coordinación militar en la zona sublevada e iba a durar el resto del verano, hasta que el general Franco fue investido por sus compañeros de armas el 1 de octubre como único jefe político y militar.

Porque, muerto Sanjurjo, Franco, desde su privilegiada posición al mando de la guarnición de Marruecos, comenzó a labrar

lo que Paul Preston, su mejor biógrafo, denomina «la forja de un Generalísimo». ³ El problema que se le planteaba a Franco era cómo pasar esas tropas de África a la Península, dado que el estrecho de Gibraltar estaba controlado por las tripulaciones de la escuadra republicana que se habían amotinado contra los oficiales sublevados.

Franco pidió entonces ayuda a Adolf Hitler y Benito Mussolini. Para llegar hasta el líder de la Alemania nazi, utilizó a un ejecutivo alemán residente en el Marruecos español, Johannes Bernhardt, quien se entrevistó con el Führer el 25 de julio y le informó de los acontecimientos en España y del carácter derechista y antibolchevique de la sublevación. Hitler decidió apoyar inicialmente esa causa con el envío de 20 aviones de transporte Junkers Ju 52, 6 cazas Heinkel 51, 20 cañones antiaéreos, municiones y personal de vuelo y de tierra, que comenzaron a llegar al Marruecos español el 29 de julio, apenas diez días después del inicio de la rebelión militar contra la República.

Mussolini decidió hacer lo mismo, tras recibir reiteradas demandas de ayuda por parte de Franco a través del cónsul italiano en Tánger y de su agregado militar. El 28 de julio envió una escuadrilla de doce bombarderos Savoia SA-81 y dos buques mercantes con cazas Fiat C.R.32. El uso de esos aviones permitió a Franco eludir el bloqueo naval de la marina republicana, pasar las tropas desde África a Andalucía y comenzar así el avance sobre Madrid. El 7 de agosto, Franco estaba ya instalado en Sevilla. En unas semanas, más de 13.000 soldados habían cruzado el estrecho de Gibraltar. De esa forma, escribe Paul Preston, «Hitler y Mussolini convirtieron un *coup d'état* que iba por mal camino en una sangrienta y prolongada guerra civil». ⁴

A finales de julio, el éxito o fracaso de la sublevación militar había partido a España en dos. Había triunfado en casi todo el norte y noroeste de España: en Galicia, León, la vieja Castilla, Oviedo, Álava, Navarra, y en las tres capitales de Aragón; en las Islas Canarias y Baleares, excepto en Menorca; y en amplias zonas de Extremadura y Andalucía, incluidas las ciudades de Cáceres, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada y Huelva. En la zona repu-

blicana habían quedado las principales ciudades, los principales focos industriales y mineros, Cataluña, el País Vasco y Asturias, y las sedes de las principales empresas y entidades financieras. La ventaja financiera de la República era al principio muy clara. Contaba con el Banco de España y su reserva de oro, unas 700 toneladas, y su territorio controlaba aproximadamente el 70 por cien del presupuesto estatal.⁵

La sublevación militar no logró su principal objetivo, hacerse con el poder y echar abajo a la República, pero el Gobierno tampoco pudo dominar la rebelión. La ayuda ítalo-germana permitió a los militares rebeldes continuar en su empeño y el Gobierno buscó también de forma urgente el auxilio internacional. Ante el acoso nazi y fascista, la solución estaba en las democracias. O eso pensaban las autoridades republicanas que tenían que hacer frente al golpe de Estado.

Según contó el socialista Léon Blum, presidente del Gobierno de Francia, el 19 de julio, José Giral, recién nombrado presidente del Gobierno de la República, le envió un telegrama: «Hemos sido sorprendidos por un peligroso golpe militar. Solicitamos que se ponga en contacto con nosotros inmediatamente para suministrarnos armas y aviones».⁶

La reacción inicial del Gobierno francés fue, en palabras de Blum, «poner en marcha un plan de ayuda, en la medida de nuestras posibilidades, para proporcionar material a la República española». Pero no fue posible. Un agregado militar en la embajada española en París, agente de los sublevados, filtró la información sobre esa decisión del Gobierno francés al diario derechista *Echo de Paris*, que inició «una campaña fortísima revelando al público todas las decisiones tomadas de la forma más precisa y generando una conmoción considerable, particularmente en los medios parlamentarios».

La opinión pública se dividió, como iba a pasar también en Gran Bretaña, entre quienes mostraban simpatía a la causa republicana, representados por la izquierda, y la derecha política, amplios sectores católicos y de la administración, que rechazó ese plan de ayuda. El miedo a la revolución, a que el conflicto de

España se extendiera a Francia, muy presente en la prensa derechista y en las fuerzas armadas, convenció también a los dos principales ministros del Partido Radical, Édouard Daladier, de la Guerra, e Ybon Delbos, de Asuntos Exteriores, de echar marcha atrás. «La intervención francesa en la Guerra Civil española sería el comienzo de la conflagración europea deseada por Moscú», advertía el semanario *Candide* a finales de julio.⁷

Las noticias que los representantes diplomáticos de Gran Bretaña en España transmitían a su Gobierno tampoco iban a ayudar a la República. Desde el primer momento describieron a los que defendían la causa republicana como comunistas al servicio del bolchevismo. Anthony Eden, ministro de Asuntos Exteriores, le pidió a Léon Blum el 24 de julio que fuera «prudente». Y Stanley Baldwin, el primer ministro conservador, le transmitió a Eden, dos días después, que «de ningún modo, con independencia de lo que haga Francia o cualquier otro país, debe meternos en la lucha al lado de los rusos». Los conservadores británicos, en el poder desde 1931, temían que cualquier intervención en España obstaculizase su política de apaciguamiento con Alemania, y el Gobierno francés siguió los consejos de su principal aliado en Europa y el 25 de julio anunció la decisión de «no intervención de ninguna manera en el conflicto interno de España».⁸

Ése fue el punto de partida de la política de no intervención que se pondría en marcha desde el mismo verano de 1936. Las autoridades francesas, con Blum a la cabeza, creían que eso era la mejor forma de calmar y controlar la división interna del país, de mantener la alianza vital con Gran Bretaña y de evitar el peligro de internacionalización de la Guerra Civil española. Aunque esa propuesta fue inmediatamente asumida por el Gobierno británico, la extensión del conflicto español al escenario internacional no pudo evitarse porque Hitler y Mussolini ya habían comenzado a enviar ayuda militar a Franco y, además, la Alemania nazi y la Italia fascista nunca respetaron esa política de no intervención. En consecuencia, la República, un régimen legítimo, se quedó inicialmente sin ayuda, hasta que la Unión Soviética comenzó a intervenir en el otoño de 1936, y los militares rebeldes,

carentes de legitimidad, recibieron casi desde el primer disparo el auxilio indispensable para hacer frente a una guerra provocada por ellos.

Mientras todo eso ocurría, el Estado republicano se tambaleaba, el orden se quebraba y una revolución radical y destructora se extendía como la lava de un volcán por las ciudades donde la sublevación había fracasado. Allí donde triunfó, los militares pusieron en marcha un sistema de terror que aniquiló físicamente a sus enemigos políticos e ideológicos.

SIN REGLAS NI GOBIERNO

De forma súbita, en ese doble proceso de rebelión militar y respuesta revolucionaria, la sangre comenzó a correr copiosamente por el territorio español. Los militares sublevados, con el general Emilio Mola a la cabeza, ya lo habían anunciado durante los meses anteriores cuando trazaron los planes para el golpe. «Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado», decía Mola en la Instrucción reservada número 1, firmada como «El Director» el 25 de mayo. «Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al Movimiento», añadía, a quienes se aplicarían «castigos ejemplares [...] para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas». Estaba claro que si había resistencias, cosa contemplada como probable, la sublevación acabaría en una guerra de conquista para salvar a España de la anarquía.⁹

La combinación de triunfos y fracasos en la sublevación pronto demostró a los militares rebeldes que la lucha iba a ser dura, larga, a varios asaltos. De ahí el clima de terror, calculado, nada espontáneo que presidió sus conquistas desde el primer día. Franco contaba para ello con las fuerzas militares del protectorado de Marruecos, famosas ya por su brutalidad. Mola tenía el apoyo de unos cuantos miles de carlistas de Navarra y Álava, con los que aplastó las resistencias y aterrorizó a miles de repu-

blicanos, socialistas y anarquistas de la ribera del Ebro, en Navarra y Zaragoza.¹⁰ En otras ciudades como Sevilla, Córdoba, Cáceres o León, los militares y las fuerzas de policía contaron con el entusiasmo de centenares de derechistas y falangistas, que se consagraron desde entonces a tareas de limpieza, a edificar una nueva España sobre las ruinas de la República.

Comenzaron así los encarcelamientos en masa, la represión selectiva para eliminar las resistencias, la tortura sistemática y el terror. Alcaldes, gobernadores civiles, dirigentes sindicales y de las organizaciones políticas del Frente Popular fueron los primeros en sufrir el castigo. La obediencia a la ley fue sustituida por el lenguaje y la dialéctica de las armas, por el desprecio a los derechos humanos y el culto a la violencia. Inaugurado ese nuevo escenario de guerra total, donde la política pasó a ser valorada exclusivamente en términos militares, ya no había sino amigos y enemigos.

Las matanzas se centraron en los lugares donde más resistencia hubo, en las localidades donde los conflictos sociales ocurridos durante la República y la mayor presencia de organizaciones de izquierda incitaban al ajuste de cuentas, que fue rápido, sin concesiones. Los últimos días de julio y los meses de agosto y septiembre de 1936 son los que arrojan las cifras más altas de asesinados en los lugares controlados desde el principio por los militares sublevados: del 50 al 70 por ciento del total de las víctimas durante la guerra se concentra en ese corto período, lo cual indica que no era sólo una represión de guerra, sino un exterminio «quirúrgico», de urgencia. Más del 90 por ciento de los casi 3.000 asesinados en Navarra o en Zaragoza ocurrieron en 1936. Pero los porcentajes son muy similares en Córdoba, Granada, Sevilla, Badajoz o Huelva, las provincias, junto con Zaragoza, con más muertos en aquella oleada de terror veraniego.

Las víctimas eran detenidas en la calle o en sus casas, por ser «significados izquierdistas», por oponerse al «glorioso Movimiento Nacional», buscadas porque aparecían en los documentos confiscados en las sedes de las organizaciones políticas y sindicales, señaladas por sus vecinos o marcadas por su irreligiosidad.

Se las encerraba en cárceles o en los numerosos edificios habilitados como cárceles en los primeros días, hasta que se les sacaba para ser asesinadas por la noche, antes del amanecer. Las autoridades judiciales se presentaban en algunas ocasiones para proceder al levantamiento de cadáveres, pero lo normal en esos primeros momentos, antes de la creación de los tribunales militares, era que quedaran abandonados, muchas veces sin enterrar, allí donde caían abatidos, en las tapias de los cementerios, en las cunetas de las carreteras, cerca de los ríos, en pozos y minas abandonadas.

El alud de asesinados causado por aquel terror generaba todo tipo de anomalías. A miles de personas nunca se las registró, mientras otras muchas aparecían como «hombre» o «mujer», sin identificar, lo cual impide todavía a sus familiares y descendientes, ya en la democracia, muchos años después de la muerte de Franco, encontrar sus restos. No todos los muertos se enterraron en los cementerios, sino que se cavaban grandes fosas comunes, como en Lardero, cerca de Logroño, en los Pozos de Caudé, junto a Teruel, o en Víznar, a escasos kilómetros de Granada, donde encontró la muerte Federico García Lorca.

En las ciudades donde fracasó la sublevación, los militares que se habían levantado contra la República fueron tratados sin piedad. A ellos se les consideraba los primeros responsables de la violencia y la sangre que estaba esparciéndose por ciudades y campos de la geografía española. Casi un centenar de jefes y oficiales que se adhirieron a la sublevación en la guarnición de Barcelona fueron ejecutados entre mediados de agosto y febrero de 1937. Los ejemplos de actuaciones impunes contra militares presos tras su derrota adquirieron una inusitada crueldad en Madrid, donde en todas las «sacas», especialmente en las masivas de noviembre de 1936, se seleccionaba para su ejecución a miembros del Ejército. La escena de matar militares se repitió en Menorca, Almería, Málaga, Albacete, Guadalajara, Lérida, San Sebastián y otras ciudades donde la sublevación no pudo triunfar.

Se suponía que todos esos militares eran fascistas «probados» y a los fascistas «probados», como declaraba el periódico anar-

cosindicalista *Solidaridad Obrera* el 1 de agosto de 1936, había que asesinarlos. Los militares y, sobre todo, el clero constituyeron los blancos inmediatos de la violencia purificadora que presidió el verano de 1936 allí donde la derrota de la sublevación abrió las puertas a la revolución. Junto a ellos, la persecución alcanzó en esas primeras semanas a políticos, conservadores, propietarios, terratenientes, labradores, burgueses, comerciantes, trabajadores significados en las fábricas por sus ideas moderadas, técnicos y jefes de personal de las diferentes industrias, y católicos. Detrás de muchos de esos asesinatos estaban los milicianos armados, los militantes de partidos y sindicatos de izquierda y los múltiples comités de empresa, barrio o pueblo que se crearon al calor de la revolución.

Porque lo que quedaba de la España republicana tras el golpe de Estado de julio de 1936 era un hervidero de poderes. Un hervidero de poderes armados, de difícil control, que trataban de llenar el vacío de poder dejado por la derrota de la sublevación militar en las principales ciudades españolas y en extensas zonas del mundo rural, en latifundios sin dueño y en cientos de pequeños pueblos sin amos. El Estado dejó de existir más allá de Madrid, si es que allí existía. Era el momento del poder de los comités, de quienes nunca lo habían tenido, del «pueblo en armas», como lo llamaban los anarquistas, al margen de ese Gobierno de Madrid, presidido por José Giral.

Muchas cosas y personas impedían al principio el control y favorecían el descontrol. Del derrumbe del Estado, de la desintegración de la Administración y del reparto de armas entre aquellos dispuestos a cogerlas surgió una oleada de igualitarismo militante, de milenarismo, una «revolución espontánea» que, según la visión de muchos testigos, habría colectivizado fábricas y tierras, suprimido los salarios y establecido el paraíso terrenal con el que hacía tiempo que el pueblo soñaba. Es la imagen, por ejemplo, que dejó para la posteridad George Orwell en su *Homenaje a Cataluña*, publicado por primera vez en inglés en 1938.

A George Orwell, recién llegado a Barcelona, el aspecto exterior que presentaba la ciudad le pareció «impresionante y abru-

mador»: «Era la primera vez que estaba en una ciudad en que la clase obrera ocupaba el poder». Los edificios estaban adornados con banderas rojas y negras; las iglesias saqueadas; las tiendas y los cafés colectivizados. Aparentemente, «las clases adineradas habían dejado de existir»: no se veía a gente «bien vestida», con corbatas y sombreros. El mono, o las «ropas muy sencillas propias de la clase trabajadora», habían desplazado al traje burgués.¹¹

En esos cambios en el «aspecto de Barcelona» se detuvo también Francisco Lacruz en la versión que desde el lado de los vencedores elaboró en 1943 sobre la revolución y el terror: «En esta ciudad, creada por el esfuerzo de una burguesía laboriosa, población excepcionalmente dotada para la vida cómoda, disciplinada y grata, todo se había convertido en sórdido y torvo. Una multitud proletaria, agitada por los más ruines sentimientos revanchistas, imponía a la gran masa absorta por el terror su sentido plebeyo de la vida». Lo bello, pulcro y refinado había sido proscrito «con rabia implacable». Lucir un traje, ir afeitado o usar perfume «era tanto como confesarse “fascista”, condenándose voluntariamente a morir».

Las mujeres tuvieron que prescindir del sombrero, de los bellos vestidos, de las joyas, «de los zapatos sutiles», y vestirse con «la ordinariez innata en ciertas mujeres de las capas inferiores de la sociedad». Los hombres, por su parte, «se esforzaban en presentarse como albañiles que acabasen de abandonar el trabajo». Se iba en mangas de camisa, «con las ropas más viejas del ajuar o a veces estropeadas ex profeso». Así era aquella Barcelona, donde la muchedumbre «sudorosa, harapienta y desaseada [...] parecía ya la de una población moscovita».¹²

Exageraciones al margen, muy propias de las imágenes y propaganda divulgadas por los vencedores de la Guerra Civil, la marea revolucionaria del verano de 1936 arrastró con ella desde el principio una ola de terror. Porque para destruir todos esos símbolos de jerarquía social en el vestido y en las costumbres, hubo que pasar por encima de los cadáveres de miles de personas, enemigos políticos y de clase, de militares y clero, de propietarios y trabajadores conservadores y católicos, de latifundistas y peque-

ños propietarios, de caciques y señoritos. Y para llegar a la colectivización de tierras y fábricas hubo que incautarse de los bienes de esos propietarios huidos, asesinados o en prisión. Un proceso que se repitió, con más o menos violencia, en las industrias de Barcelona, Madrid y Valencia, o en las tierras de Aragón, Jaén y Ciudad Real.

Antes de construir, había que eliminar de raíz «el mal social» y a sus principales causantes. En eso consistía la revolución para la mayoría de los dirigentes y militantes anarcosindicalistas, pero también para otros muchos socialistas o sindicalistas de la UGT: en la eliminación radical de los símbolos de poder; en el derrumbe del orden existente; en propagar por doquier una retórica agresiva que hablaba de sociedad sin clases, sin partidos, sin Estado. En los discursos, en las acciones, aparecían las herencias jacobinas, de los revolucionarios decimonónicos, de la revolución rusa, reflejadas, por ejemplo, en los «Comités de Salud Pública» que, como en Lérida o Málaga, se dedicaron en aquel verano de 1936 a la represión de la contrarrevolución.

La eliminación radical de todos esos representantes del poder encontró en el «paseo» la «práctica de justicia expeditiva» para saldar rencillas, saciar el odio de clase o clamar venganza. La descripción que de ese método nos ha dejado el anarquista Juan García Oliver, ministro de Justicia del Gobierno republicano desde noviembre de 1936 a mayo de 1937, no deja lugar a dudas: «puesto que la sublevación militar había supuesto la rotura de todos los frenos sociales, porque fue realizada por las clases históricamente mantenedoras del orden social, los intentos de restablecer el equilibrio legal hicieron que el espíritu de justicia revirtiese a su origen más remoto y puro: el pueblo: *vox populi, suprema lex*. Y el pueblo, en tanto duró la anormalidad, creó y aplicó su ley y procedimiento, que era el “paseo”». ¹³

Asaltos a prisiones, «paseos» y «sacas» fueron las principales manifestaciones del terror desatado por la tormenta revolucionaria del verano de 1936 en nombre del pueblo soberano. Mientras duró el calor estival, al igual que sucedía con el otro terror «caliente» incitado y ejecutado por militares, señoritos y propie-

tarios, no se echaron en falta los procedimientos judiciales. El «paseo» era mucho más rápido. Y como ocurrió con la violencia en la zona controlada por los militares sublevados, la ejercida en el territorio republicano se concentró en los meses de agosto y septiembre, con la importante excepción de Madrid, donde varios miles de personas fueron asesinadas en noviembre de 1936, en el momento del primer asedio que la capital de España sufrió por parte de las tropas franquistas.

No todos querían derramar sangre y hubo algunas voces, de ilustres dirigentes republicanos, socialistas o anarquistas, que se alzaron desde el principio contra la masacre, algo muy raro entre las autoridades y la jerarquía de la Iglesia católica en el otro bando. La derrota de la sublevación, sin embargo, soltó amarras, permitió una absoluta liberación de los yugos del pasado, hizo de partera de la ansiada revolución, de la hora esperada del juicio definitivo a los patronos, ricos y explotadores, cuestión esta última favorita de la propaganda y retórica más radicales. Sin reglas ni gobierno, sin mecanismos de coerción obligando a cumplir leyes, la «sed de justicia», la venganza y los odios de clase se extendieron con una fuerza devastadora para aniquilar el viejo orden.

Las iras de los militares sublevados y falangistas se centraron especialmente en las autoridades republicanas y en los diputados elegidos por la coalición del Frente Popular en febrero de 1936. Según el informe elaborado por la Secretaría del Congreso de los Diputados y publicado el 22 de agosto de 1938, 40 habían sido asesinados y 12 se hallaban presos o «desaparecidos» en el «territorio rebelde».

De los asesinados, 21 eran socialistas, 2 comunistas y el resto republicanos; 18 pertenecían a provincias andaluzas y 5 a Galicia, una tierra en la que los políticos de izquierda y nacionalistas fueron borrados del mapa. Como Ángel Casal, editor del Partido Galleguista, alcalde de Santiago de Compostela y vicepresidente de la Diputación de la Coruña en 1936. Había formado parte de la comisión que entregó el proyecto de estatuto de autonomía en el Congreso de los Diputados. Su cadáver apareció el 19 de agosto de ese año tirado en una cuneta.

Un día antes, según los indicios más creíbles, aunque la fecha no se conoce con exactitud, debió de morir asesinado el poeta Federico García Lorca, la víctima más conocida del terror militar y fascista. Tras el triunfo de la sublevación en Granada, García Lorca se escondió en la casa de la familia del poeta falangista Luis Rosales, pensando que allí podría estar a salvo. En la tarde del domingo 16 fue a buscarlo allí Ramón Ruiz Alonso, un derechista muy conocido en Granada, ex diputado de la CEDA. Esa misma mañana habían asesinado al cuñado del poeta, Manuel Fernández-Montesinos, ex alcalde republicano de Granada, casado con Concha García Lorca.

Según Ian Gibson, cuando Ruiz Alonso llamó a la puerta de los Rosales en la calle Angulo, iba acompañado de dos compañeros de la CEDA: «Juan Luis Trescastro —conocido terrateniente y fanfarrón en la más pura línea machista del señorito andaluz— y Luis García Alix, secretario del partido en Granada». Llevaron a García Lorca al Gobierno Civil, en manos del comandante José Valdés Guzmán, quien desde la sublevación militar estaba limpiando a fondo Granada de «rojos».¹⁴

A García Lorca lo mataron con un maestro y dos banderilleros anarquistas, enterrados juntos en la zona de Víznar, a pocos kilómetros de Granada, donde los falangistas habían ordenado la apertura de fosas comunes en las que habían trabajado masones y «rojos» antes de ser asesinados por los voluntarios de la fascista «Escuadra Negra». Entre sus asesinos estaba Juan Luis Trescastro, ese «machista» y «fanfarrón» que decía estar harto de «maricones» y alardeaba después por Granada de haber «medido dos tiros en el culo» a García Lorca. Su certificado de defunción recurría a un eufemismo más de los muchos que se utilizaron en la zona franquista para falsear la causa de la muerte: «a consecuencia de heridas producidas por hechos de guerra».

En la zona leal a la República, el más insigne de los asesinados fue José Antonio Primo de Rivera, el mártir de la cruzada, en cuyo honor, ya desde la guerra, pero sobre todo en la posguerra, las autoridades franquistas levantaron edificios, a la vez que se designaba con su nombre a cientos de calles, plazas y escuelas y

se grababa en los muros de las iglesias la leyenda «José Antonio Primo de Rivera ¡Presente!».

Nacido en 1903, cinco años después que García Lorca, era hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. En 1933, tras la subida al poder de Adolf Hitler, se interesó por el fascismo y fundó, después de asegurarse el respaldo político y financiero de la derecha tradicional, Falange Española, el partido que mejor incorporó la violencia a su retórica y más la practicó en la calle en la atmósfera cargada de la España de los años treinta.

En febrero de 1936 se presentó a las elecciones en la provincia de Cádiz y no salió elegido. Un mes después, tres falangistas intentaron asesinar a Luis Jiménez Asúa, catedrático de Derecho y diputado socialista. No lo consiguieron, pero mataron a su guardaespaldas. El 14 de marzo, José Antonio Primo de Rivera y los principales dirigentes falangistas fueron arrestados y el partido pasó a la clandestinidad.

El 5 de junio, junto con su hermano Miguel, fue trasladado a la cárcel de Alicante, posiblemente para evitar un intento de fuga y alejarlo de la capital, que era entonces el principal escenario de la violencia callejera falangista. En Alicante fracasó la sublevación militar y el 18 de noviembre, un Tribunal Popular lo condenó a muerte. Fue fusilado en la cárcel, en la madrugada del 20 de noviembre de 1936.¹⁵

La Guerra Civil española, en definitiva, ha pasado a la historia, y al recuerdo que de ella queda, por la deshumanización del contrario y por la espantosa violencia que generó. Si tenemos en cuenta las investigaciones más rigurosas, elaboradas en los últimos años, hubo al menos 150.000 víctimas mortales de esa violencia durante la guerra, casi cien mil en la zona controlada por los militares sublevados y algo menos de sesenta mil en la republicana.¹⁶

Durante los dos meses de verano que siguieron a la sublevación militar, el terror se extendió más allá de los límites de las organizaciones políticas, del aparato del Estado en la zona leal a la República, y del propio Ejército en el bando rebelde. Nuevos poderes ocuparon los espacios vacíos dejados por la dislocación

del orden causada por el golpe militar. Poderes autónomos, o con bastante autonomía, como los escuadrones de falangistas o los comités revolucionarios, operaron en el territorio de castigo y justicia ocupado antes por el Estado, a la vez que ponían en marcha mecanismos extraordinarios de terror que no necesitaban en ese momento sanción o legitimación.

DEL TERROR «CALIENTE» AL TERROR «LEGAL»

A partir de noviembre de 1936, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Tras la frustrada ofensiva franquista sobre Madrid, nadie creía seriamente, por mucho que la propaganda dijera otra cosa, en un desenlace rápido de la guerra. Los frentes se estabilizaron y excepto en Madrid, donde se siguió librando durante semanas una batalla decisiva, los ataques se resolvían en pequeñas conquistas, afianzamientos de posiciones o acontecimientos de escasa dimensión militar. Desde la entrada en Toledo a finales de septiembre de 1936 a la conquista de Málaga a comienzos de febrero de 1937, las tropas de Franco no sumaron ninguna victoria, mientras que las todavía multicolores fuerzas leales a la República bastante hacían con evitarlo. En esos cuatro largos meses, los grupos paramilitares e «incontrolados» desaparecieron prácticamente del escenario y las milicias se sometieron definitivamente a la disciplina del Ejército, proceso este último que, obviamente, tardó más en consumarse en la zona republicana que en la rebelde.

La concentración del poder no resultó fácil, ni siquiera en el bando insurgente donde todo parecía destinado al mando supremo del general Franco. Pero había pruebas claras de que el terror se estaba controlando en los dos bandos «desde arriba»: los asesinatos debidos a «sacas» y «paseos» decrecieron considerablemente. El terror, como la atmósfera, se enfrió, inaugurando una fase de violencia «legal», pasada por los tribunales.

El enemigo seguía allí, quedaban muchos por matar, pero la necesidad de atender principalmente a la guerra, la concentra-

ción del poder y la disciplina en la retaguardia comenzaron a frenar los excesos. En el bando republicano, el gobierno y las organizaciones políticas y sindicales lograron parar de forma casi definitiva la matanza; en el de los franquistas el ritmo descendiente de la violencia fue menor y cada vez que conquistaban una ciudad, volvía el terror «caliente» de los asesinatos en masa y sin garantías.

El control del descontrol costó un tiempo en la zona republicana. Los primeros decretos de lo que se llamó entonces la «justicia popular» vieron la luz el 23 y el 25 de agosto de 1936, inmediatamente después del asesinato de ilustres derechistas y políticos en la cárcel Modelo de Madrid.¹⁷ Aparecieron así los tribunales especiales «para juzgar los delitos de rebelión y sedición y los cometidos contra la seguridad del Estado». Los tribunales estarían formados por «tres funcionarios judiciales, que juzgarían como jueces de derecho, y catorce jurados que decidirían sobre los hechos de la causa». Esa «justicia de excepción» de la República incorporaba el «procedimiento sumarísimo» y diversos elementos de la jurisdicción militar sin necesidad de recurrir al «estado de guerra», que el gobierno republicano no declaró en todo su territorio leal hasta el 9 de enero de 1939.¹⁸

El gobierno de la Generalitat promulgó el 24 y el 28 de agosto decretos muy similares por los que se creaban «jurados populares para la represión del fascismo». No fue sólo un fenómeno de Madrid o Barcelona: en casi todas las provincias de la zona republicana se constituyeron en los días siguiente los tribunales populares. Era el paso, o así lo parecía, desde la «anormalidad» en la que el «pueblo», como decía García Oliver, «creó y aplicó su ley y su procedimiento», es decir, el «paseo», a la «normalidad», una etapa en la que «los elementos sospechosos debían ser entregados a los Tribunales populares y ser juzgados, con imparcialidad, con castigo de los culpables y puesta en inmediata libertad de los inocentes».¹⁹

La violencia «legal» se impuso definitivamente al terror «caliente» desde comienzos de 1937, aunque en la mayoría de las provincias la onda descendiente se había iniciado a finales del

año anterior. Por varias razones. En primer lugar, porque la llegada de Largo Caballero al Gobierno el 4 de septiembre de 1936, acompañado de socialistas, comunistas y, a partir del 4 de noviembre, de anarquistas, involucró a todas esas organizaciones en la defensa de la responsabilidad y de la disciplina. Nada ilustra mejor ese cambio que el hecho de que fuera un «anarquista de acción» como García Oliver quien consolidara los tribunales populares o creara los campos de trabajo, en vez del tiro en la nuca, para los «presos fascistas». En segundo lugar, porque la mayoría de los comités revolucionarios y antifascistas creados al calor de la derrota de la sublevación fueron sustituidos por consejos municipales formados por acuerdos entre las diferentes organizaciones políticas del Frente Popular. Y por último, porque los grupos armados y milicias que pululaban por la retaguardia y los frentes fueron en esos mismos meses militarizados e incorporados al nuevo ejército de la República. Con poderes políticos y armados más fuertes y disciplinados, con la guerra en el centro del escenario, la tormenta revolucionaria se esfumó, quedando bloqueada la violencia de las «sacas» y «paseos».

El delito principal del que se acusaba a los procesados por los tribunales populares era el de rebelión militar y las personas juzgadas fueron militares y miembros de las fuerzas de seguridad, guardias civiles sobre todo; ciudadanos que tomaron las armas para apoyar la sublevación; y derechistas o afiliados a organizaciones católicas y monárquicas. El perfil de los ejecutados tras las sentencias de los tribunales populares de varias provincias era muy similar al de los que caían abatidos en los «paseos» y las «sacas», aunque apenas había eclesiásticos, a quienes se asesinó sobre todo en los primeros meses. Varios miles de personas pasaron por los diferentes tribunales populares de la zona republicana desde septiembre de 1936 hasta mayo de 1937, meses en los que se juzgó a la mayor parte de los acusados por esos motivos. En Barcelona fueron ejecutados 97 de los 427 procesados; y en Madrid, 45 de 566. Más duro fue el tribunal de la provincia de Valencia, que condenó a muerte al 43,82 por ciento de los 89 procesados, aunque sólo fueron ejecutadas finalmente 23 personas.

En la otra zona, todo parecía bajo el control de los militares, con Franco ejerciendo desde octubre de 1936 como máxima autoridad. Aunque si hacemos caso a las pruebas documentales, no era la justicia militar la que imperaba en la retaguardia. Durante los últimos meses de 1936 y los primeros de 1937 fueron muy pocas las víctimas mortales que tuvieron la oportunidad de pasar por consejos de guerra y tribunales militares. Un año después de comenzada la guerra, imperaban todavía las «sacas» y «paseos» protagonizados por grupos civiles armados. La fase del terror «legal» tardó mucho más en aparecer que en la zona republicana y sólo a partir del otoño de 1937 logró imponerse al terror «caliente».

De las 186 víctimas de muerte violenta registradas durante 1937 en la ciudad de Zaragoza, sólo 47 fueron ejecutadas tras sentencias dictadas por consejos de guerra. Una notable «mejoría» respecto a los meses de 1936 que siguieron a la sublevación en los que sólo 32 de las 2.578 víctimas de la represión se sentaron ante tribunales militares. En la provincia de Cáceres, menos de un centenar de personas fueron ejecutadas tras pasar por consejos de guerra hasta la primavera de 1937, mientras que más de mil habían sido «paseadas» y hasta arrojadas al Tajo desde lo más alto de los puentes.

Hubo, en realidad, un largo período, de seis a ocho meses, en que los militares no pusieron en marcha la maquinaria de los juicios sumarísimos. Para «regenerar» la Patria, y librarla de republicanos y rojos no hacían falta jueces o abrir diligencias e investigaciones.

Y si se abrían, tampoco eran necesarios muchos testimonios o imputaciones fundadas sobre algún crimen grave cometido por el acusado. Éstos eran, por ejemplo, los crímenes que, según el texto del consejo de guerra del 15 y 16 de febrero de 1937, había cometido Emili Darder, el ex alcalde republicano de Palma de Mallorca: «Fue un elemento perturbador que azuzaba a los obreros contra los patronos. Pertenecía a Izquierda Republicana [...]. Se le atribuye intervención en el movimiento soviético que se preparaba en Mallorca».²⁰

Emili Darder había nacido en Palma en junio de 1895. Se doctoró en Medicina e ingresó en la Academia de Medicina y Cirugía de Palma. En 1933 accedió a la alcaldía de esa ciudad y en el momento de la sublevación militar estaba muy enfermo, como consecuencia de una angina de pecho que se le había detectado unos días antes.

El día 20 de julio lo detuvieron en su casa. Lo trasladaron al Hospital Provincial y después al Castillo de Bellver. Estuvo allí seis meses, incomunicado. La noche anterior a su ejecución, pudieron verlo en la enfermería su mujer, Miquela Rovira, y su hija Emilia. Según Georges Bernanos, en *Los grandes cementerios bajo la luna*, esa última noche las enfermeras mantuvieron su corazón, «que se estaba debilitando rápidamente», a base de inyecciones: «lo llevaron directamente del hospital al lugar del sacrificio».²¹ Fue ejecutado en la mañana del 24 de febrero de 1937 en el cementerio de la capital balear, junto con el ex diputado socialista Alexandre Jaume y el alcalde de Inca, Antoni Mateu. Darder, al contrario que Jaume, pidió y obtuvo «los auxilios de la Religión». El padre Anastasi, superior de los capuchinos, le tuvo que dar la comunión en una cuchara con agua.

«Nosotros hacemos la guerra porque nos la hacen», decía Manuel Azaña en un discurso en el Ayuntamiento de Valencia, entonces capital de la República, el 21 de enero de 1937.²² Una guerra terrible que en apenas medio año había mezclado el cruel terror de militares y falangistas con una subversión violentísima del orden social. Decenas de miles de personas habían sido asesinadas en los dos bandos. A otros muchos miles se les expulsó de sus puestos de trabajo, con «depuraciones» que se extenderían por la administración y la enseñanza. Los militares rebeldes y sus aliados, los que habían perdido los puestos políticos en las elecciones de febrero de 1936, tuvieron que emplearse a fondo en esa limpieza, cortando en mil pedazos las redes sociales que republicanos, intelectuales, socialistas y libertarios habían establecido en pueblos y ciudades, en medios periodísticos y de difusión cultural, en casas del pueblo y ateneos, en asociaciones y sindicatos.

Muy pronto quedó claro que ese camino que llevaba de la sublevación a la guerra, de las tensiones sociales al exterminio del contrario, iba a tener repercusiones de largo alcance. En Tenerife, los enormes almacenes de la compañía inglesa Fyffes pasaron a tener presos republicanos y sindicalistas en vez de fruta. Desde ellos, los «patrulleros del amanecer» se los llevaban para arrojarlos al mar. En León, el edificio de San Marcos, antigua hospedería y joya del plateresco, era utilizado como cárcel por los militares rebeldes.

Tendrá que llegar de nuevo la convivencia, proclamaba Azaña en la Universidad de Valencia unos meses después, el 18 de julio de 1937: «tenemos que habituarnos otra vez unos y otros a la idea, que podrá ser tremenda, pero que es inexcusable, de que los veinticuatro millones de españoles, por mucho que se maten unos con otros, siempre quedarán bastantes, y los que queden tienen necesidad y obligación de seguir viviendo juntos para que la nación no perezca». ²³

Quedaba todavía espacio para el optimismo y los sueños, algo difícil de creer después de lo que había pasado. O quizás eran cosas que Azaña, ese maestro de la palabra, quería transmitir como muestra de su firme apuesta por la paz. Pese a que algunas batallas estaban ya perdidas y lo estarían durante décadas. La de la convivencia, por ejemplo. ¿Qué podía hacer esa palabra en medio de tanta incitación a la muerte?

La apelación a la violencia y al exterminio del contrario fueron valores duraderos en la dictadura que salió de la Guerra Civil y que iba a prolongarse durante casi cuatro décadas. Ya durante la guerra, la Iglesia católica, al convertir un conflicto armado civil en cruzada religiosa, al unir la espada y la cruz, legitimó el derecho a la rebelión de los militares y justificó la represión que habían emprendido. La entrada en escena de lo sagrado, lejos de mitigar la violencia, la incrementó, la bendijo por un lado y atizó todavía más la ira popular contra el clero que había estallado en el mismo intento de la derrota del levantamiento militar.